

**CARTA S.I. N° 2179**

**SANTIAGO, 2 de Marzo de 2016**

**SEÑORA:**

[REDACTED]  
[REDACTED]

**PRESENTE**

El Jefe del Subdepartamento de Identificación del Servicio de Registro Civil e Identificación, "por orden del Director Nacional", de acuerdo a lo resuelto mediante Resolución Exenta N°988, de 1° de marzo de 2012, y en relación a su requerimiento de información derivado a este Servicio y cuyo contacto es el N° **AK002C0009413**, mediante el cual señala: *"Señores Registro Civil, escribo esta solicitud amparandome en Ley 20.285 Transparencia, mi pareja [REDACTED], se encuentra actualmente recluso en el complejo penitenciario de Valparaíso, el ha intentado en varias oportunidades de obtener su cédula de identidad, sin resultado. El tiene asignado el número Rut [REDACTED] número con el cual se han inscrito dos hijos [REDACTED] y [REDACTED] estas inscripciones fueron ordenadas por el Tribunal de Familia, hemos recurrido al Tribunal de Garantía en donde se reconoce el número de [REDACTED]"*, informa a usted lo siguiente:

De lo dispuesto en el DL N° 26/1924, DL N° 102/1924 y DFL N° 51/1943, todos del Ministerio del Interior y la Ley N° 6.880 de 19 de abril de 1941, que conforman el cuerpo normativo que regula el sistema de identificación obligatorio actualmente vigente en nuestro país, se desprende que la finalidad de este registro de datos sensibles y personales, es contar con un sistema único nacional que permita la identificación civil de las personas y la emisión de los documentos que dan fe de su identidad ante terceros.

Por su parte, mediante el Decreto Supremo N°18, de la Subsecretaría de Guerra, publicado el 13 de marzo de 1973, se implantó en el país el rol único nacional, sobre la base del número nacional de identificación que otorga el Servicio de Registro Civil e Identificación, que es válido para todos los registros en que deba inscribirse cada persona, sea en razón de su estado, actividad, ejercicio de derechos políticos, obligaciones tributarias o cualquiera otra actuación que le concierna. En cumplimiento de ese Decreto, desde 1984 se asigna este número (RUN) a la persona al momento de practicar la

inscripción de su nacimiento. Por otra parte, respecto de los extranjeros y chilenos residentes en el exterior que obtienen cédula por primera vez, no existe inscripción de nacimiento de los primeros y el número asignado a los segundos es coetáneo con la obtención de documento.

Sin perjuicio de ello, tanto el registro como el documento de identidad mismo contiene datos personales y/o sensibles que deben ser tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, los que en virtud de lo dispuesto en las letras f) y g) del artículo 2 de la Ley N° 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada, no pueden ser objeto de tratamiento, salvo que la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a su titulares, ésto último en relación con los datos sensibles. El RUN registrado en nuestro sistema de identificación constituye un dato personal que sólo puede ser comunicado a terceros cuando su titular lo autoriza o en los casos que la Ley lo establece. Por su parte la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada señala que los datos obtenidos deben ser utilizados para el fin para el cual fueron capturados.

En efecto, en virtud del artículo 5° de la Ley de Transparencia toda información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de la Administración, es pública. Sin embargo, el dato solicitado, a saber, el RUN de la persona consultada ha sido recolectado de una fuente no accesible al público por lo cual, en principio, le resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7° de la Ley N° 19.628, que exige a quienes trabajen en el tratamiento de datos personales, "...tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público".

Asimismo, se ha señalado que al ser la Ley N° 19.628 un cuerpo normativo especial en materia de tratamiento de datos personales, debe reconocerse que mediante la regla de secreto contenida en su artículo 7° el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia. Por otro lado, el Consejo para la Transparencia ha resuelto, en la decisión amparo Rol C1290-14 en base a los criterios que se transcriben a continuación:

*8) Que, en este contexto, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia ya se ha pronunciado y resuelto respecto de solicitudes de información realizadas al amparo de la Ley de Transparencia, en que se requieren conocer datos*

personales contenidos en un registro banco de datos. En síntesis, al resolver, entre otros, los amparos Roles A10-09, A126-09, C211-11 y C315-11, ha declarado que los **datos contenidos en una nómina (nombre, apellido, RUT, dirección, entre otros) son datos personales**, pues constituyen información concerniente a una persona natural identificada, en los términos del artículo 2°, letra f), de la Ley N° 19.628. Agregando, **que divulgar los datos contenidos en el registro antes indicado constituye una comunicación o transmisión de datos personales a individuos distintos de su titular**, según preceptúa la letra c) del artículo 2° de la Ley N° 19.628, siendo menester determinar si su comunicación se encuentra amparada por el derecho de acceso a la información pública o si, por el contrario, debe ser sometida al régimen de secreto consagrado en la Ley N° 19.628. En efecto, en virtud del artículo 5° de la Ley de Transparencia toda información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de la Administración, es pública, tal como acontece, en principio, con este listado. Sin embargo, **el dato solicitado por el reclamante ha sido recolectado de una fuente no accesible al público** por lo cual, en principio, le resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7° de la Ley N° 19.628, que exige a quienes trabajen en el tratamiento de datos personales, "...tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público". Finalmente, se ha señalado que al ser Ley N° 19.628 un cuerpo normativo especial en materia de tratamiento de datos personales debe reconocerse que mediante la regla de secreto contenida en su artículo 7° el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia.

9) Asimismo, específicamente respecto del RUN señala: "Que, en consecuencia, el dato correspondiente al RUT se encuentra en el Servicio de Registro Civil e Identificación en un registro que no es de libre de acceso público, y por lo tanto, sólo puede tratarse al interior de dicho órgano y específicamente para los fines específicos que motivaron su entrega, **descartándose su cesión a terceros**"



La misma situación ocurre respecto de los antecedentes penales de una persona, los que no pueden ser divulgados sino en los casos y a los organismos que la ley establece. Uno de estos casos ocurre cuando el titular de los datos otorga un mandato notarial especial a un tercero para acceder a su información penal y a la relativa a su RUN.

En consecuencia y visto lo dispuesto en el Art.21 N° 2, de la Ley N° 20.285, y Art. 7 del Decreto Supremo N° 13 del año 2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se deniega el acceso a la información solicitada.

Se informa que la Ley contempla un plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la presente respuesta para que usted solicite amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia y que se procederá en su oportunidad a incorporar esta respuesta, en el Índice de actos y documentos calificados como secretos y reservados del Servicio”.

Atento a sus consultas, que puede hacernos llegar a través de nuestro sitio web [www.registrocivil.cl](http://www.registrocivil.cl).

Saluda atentamente a usted,

  
 MAURICIO GONZALEZ BARRIOS  
JEFE DE IDENTIFICACION (S)

**“Por orden del Director Nacional”**